

VIRGILIO DE LA PASCUA, FUNCIONARIO Y PERIODISTA CONDENADO A MUERTE

Juan A. Ríos Carratalá

ja.rios@ua.es

Las singularidades de la represión durante la posguerra permiten documentar que una persona dispuesta a presentarse voluntariamente en la comisaría, porque confía en la inocencia de su comportamiento durante la guerra o en la relativa trascendencia de los cargos que alguien le pudiera imputar, acaba condenada a muerte tres meses después en un sumarísimo de urgencia. Y todo sin mediar la presentación de pruebas o testimonios verificados por parte del juez instructor y el fiscal. El caso del funcionario del Tribunal de Cuentas y periodista republicano Virgilio de la Pascua es un buen ejemplo de esta desmesura represiva, que podemos reconstruir gracias al análisis del sumario n.º 6332 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid).

El nombre del fugaz subdirector del *ABC* republicano en el verano de 1936 ya apareció citado cuando abordamos el proceso seguido contra el finalmente fusilado Augusto Vivero. Su colega de la prensa y otros menesteres de la retaguardia no acabó ante un pelotón de fusilamiento. Tal vez porque su actuación fue más discreta y generó menos enemigos, pero Virgilio de la Pascua sufrió penalidades que nunca imaginaría cuando, apenas entradas las tropas del general Franco en Madrid, se presentó voluntariamente en una comisaría del distrito de Hospicio. La razón, según reconoce el periodista en la primera declaración, es que por entonces ya le habían buscado en su domicilio para detenerle. Resulta probable que, consciente del peligro para la familia, el funcionario dispuesto a exaltar en 1931 la figura de Fermín Galán intentara evitar lo sucedido con el periodista anarquista Mauro Bajatierra en las calles de aquel Madrid de la Victoria. Las comisarías de la Victoria eran peligrosas, pero ante la inminencia de la detención, las calles podían serlo más sin posibilidad alguna de defensa.

Vayamos a los documentos del sumario n.º 6332, que por razones no justificadas se mezcla finalmente con otros también depositados en el Archivo General e

Histórico de Defensa. La circunstancia se repite en los legajos de otros sumarísimos de urgencia cuyos encausados se vieron procesados simultáneamente por los mismos hechos en diferentes juzgados. La singularidad de esta inevitable confusión es notable y nos remite al escaso rigor jurídico de los procedimientos judiciales durante la posguerra.

El 29 de marzo de 1939, la Comisaría de Seguridad del distrito madrileño de Hospicio informa al Comisario General de Seguridad de que Virgilio de la Pascua se ha presentado voluntariamente. El motivo alegado por el republicano era saber que la policía militar había ido a su domicilio para detenerle. Vistas las fechas, el colaborador de *La Voz*, *Libertad* y *Heraldo de Madrid* debió ser uno de los objetivos preferentes de los ocupantes de Madrid. El periodista y funcionario, además, reconoció de salida que era militante de Izquierda Republicana, uno de quienes participaron en la incautación de los periódicos *El Debate* y *ABC* a principios de la guerra, autor de artículos «encomiando las excelencias de la zona roja», miembro fundador junto a Augusto Vivero del batallón Águilas de la Libertad y, posteriormente, comandante honorario del «batallón 2º de retaguardia». Los cometidos de los mismos no se detallan. El ingenuo Virgilio de la Pascua debió pensar que la confesión voluntaria y temprana de lo evidente podía ser un atenuante a la hora del proceso y la posterior condena. La lógica de la represión franquista no admitía estas flaquezas de quienes están dispuestos a admitir hasta los arrepentimientos.

A partir de la declaración efectuada el 29 de marzo de 1939, el auditor del Ejército de Ocupación, Ángel Manzaneque Feltrer, ordena al juez permanente n.º 1 instruir diligencias contra el detenido con el n.º 3009 para el correspondiente sumario. Fruto de las mismas, aparece en la documentación la primera declaración de Virgilio de la Pascua, de cuarenta y siete años y natural de San Fernando (Cádiz), en dicho juzgado militar. La indagatoria tiene lugar el 1 de mayo de 1939. En la misma, el procesado reconoce su afiliación sindical a la UGT, ser uno de los fundadores de Unión Republicana, funcionario del Tribunal de Cuentas cuando comenzó la guerra y voluntario en las Milicias de Retaguardia n.º 1 para repartir ropas y víveres entre los miles de refugiados en Madrid.

Los datos reconocidos eran públicos e innegables a la vista de los diferentes testimonios de quienes podían ser requeridos en este sentido. Virgilio de la

Pascua intentó contrarrestarlos mediante argumentos que probaran un comportamiento contrario a los que pudieran ser objeto de condena por parte de los vencedores. Así, el periodista indica que se separó de Unión Republicana por discrepancias con su línea política durante la guerra, que también fue separado del comité depurador de los funcionarios del Tribunal de Cuentas y, sobre todo, que en el mismo «amparó a personas de derechas y falangistas, no por ideología, sino porque eran los más inteligentes». El testimonio a la búsqueda del perdón o la atenuación de la condena lo complementa cuando recuerda haber declarado a favor de personas de derechas. Así procedió en juicios celebrados durante la guerra e incluso cita el nombre de Ramón Martínez Quesada como derechista al que sacó de la cárcel. Con el objeto de probar lo afirmado, Virgilio de la Pascua facilita los nombres de distintas personas que podrían avalarle. Las correspondientes diligencias quedaron pendientes.

La suerte procesal del periodista se complica cuando a continuación, además del sumario 6332 instruido por el juez militar permanente n.º 1, Virgilio de la Pascua tiene constancia de que hay otro sumario abierto contra él y varios funcionarios del Tribunal de Cuentas: el n.º 3009, instruido por un juez militar de funcionarios, que podría disponer de una información más precisa acerca de su actuación en el comité de depuración de ese organismo actuante durante la guerra. De hecho, la misma sería decisiva de cara a su posterior condena a muerte, donde el tribunal nunca hizo hincapié en su actividad periodística porque la consideraría de importancia menor en comparación con la desarrollada como funcionario al servicio de la II República.

El 14 de junio de 1939, el abogado Manuel Muñoz Román declara como testigo ante el juez permanente n.º 1. Según sus palabras recogidas en la correspondiente acta, Virgilio de la Pascua era militante de Izquierda Republicana, participó en las incautaciones de *ABC* y *El Debate* y, junto con Augusto Vivero, formó parte del batallón Águilas de la Libertad en la retaguardia madrileña. La circunstancia señalada por el testigo y reconocida por el encausado no propicia que el juzgado recabara información acerca del proceso paralelo seguido contra quien llegara a ser director fugaz de *ABC*. Los mismos hechos eran objeto de diferentes consejos de guerra. El único aspecto positivo para el encausado en el citado testimonio es que el abogado reconoce saber de

Virgilio de la Pascua como testigo favorable a personas de derechas en juicios celebrados durante la guerra. Ya no hubo más testimonios, a favor o en contra, porque los sumarísimos de urgencia basaban la eficacia en una rapidez ajena a cualquier respeto de las garantías jurídicas.

La instrucción queda completada con un informe sobre el periodista emitido el 7 de mayo de 1939 por la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad. El texto conservado en el sumario indica que Virgilio de la Pascua «aunque parece ser observaba buena conducta era de ideas extremadamente izquierdistas» y, por otra parte, «escribía en *La Voz*, *Libertad* y *Heraldo de Madrid* estando además en el gabinete de prensa de la Presidencia» de la II República. La instrucción apenas recalca en la faceta como periodista, ignora el contenido de los artículos publicados en los citados diarios y obvia la posibilidad de remitir el caso al Juzgado Militar de Prensa. De hecho, se le juzga exclusivamente como funcionario al servicio de la II República en distintas actuaciones propias de la retaguardia. Vista la documentación conservada, tampoco queda constancia de haber intentado comprobar la veracidad del informe que situaba a Virgilio de la Pascua a las órdenes de Manuel Azaña.

El 14 de junio de 1939, el juez permanente n.º 1 redacta el auto resumen, que repite o sintetiza lo ya señalado en las declaraciones voluntarias o los interrogatorios, y sin más diligencias o providencias -la instrucción es manifiestamente incompleta- pide el procesamiento de Virgilio de la Pascua por el omnipresente delito de adhesión a la rebelión.

El 19 de junio de 1939, el fiscal, cuya firma es ilegible, pide la pena de muerte para el periodista y funcionario «de antiguo abolengo marxista», aunque Virgilio de la Pascua compartiera las ideas de un Manuel Azaña por entonces «marxista» al margen de su abolengo. Dos días después, el presidente del tribunal que ha de juzgarle fija la fecha de la vista previa para el 22 de junio de 1939. Ese día, y por motivos nunca aclarados en la documentación, el fiscal del caso cambia de criterio y pide para Virgilio de la Pascua una condena a treinta años de reclusión. El defensor, supongo que sorprendido, acepta la petición de su colega del ministerio fiscal y, sin ninguna argumentación, la comparte porque en estos sumarísimos de urgencia los defensores también acusan. El periodista, por su

parte, añade «que es un arrepentido y que siempre fue creyente» en un intento desesperado de evitar la condena.

El mismo día 22, con los plazos de un verdadero sumarísimo de urgencia, el tribunal del consejo de guerra permanente n.º 11 dicta sentencia en la causa n.º 6332. El tribunal está presidido por el coronel Pablo Villaflor, con el teniente Fernández Fernández y los alféreces Juan Torroba y Latorre Russo como vocales actuando como ponente el oficial Juan Pérez de la Ossa, de cuyo comportamiento ya dimos cuenta en el caso del periodista Diego San José.

El citado tribunal considera probado que Virgilio de la Pascua formó parte del comité depurador del Tribunal de Cuentas durante la guerra, fue miembro de Unión Republicana, «periodista izquierdista», partícipe en las incautaciones de los dos periódicos citados, «realizó campaña antinacional y marxista durante más de dos años» y destacó en la retaguardia «tomando parte en la persecución y terror de la población civil». Los hechos dados como probados no cuentan con pruebas o testimonios, pero la irregular circunstancia no debió preocupar a quienes firmaron la sentencia. El resultado fue la petición de la pena de muerte para Virgilio de la Pascua «como autor de un delito de adhesión a la rebelión con la concurrencia de circunstancias (muy) agravantes muy cualificadas» (*sic*).

Por razones que no constan en la documentación conservada en el sumario del Archivo General e Histórico de Defensa, la sentencia del condenado a muerte, como su colega Augusto Vivero, quedó «anulada». La sorprendente e injustificada decisión debió corresponder al auditor, pero la conjetura no la podemos confirmar mediante la cita del correspondiente documento. En cualquier caso, el preso Virgilio de la Pascua se libró de la posibilidad de presentarse ante un pelotón de fusilamiento, pero permaneció en las cárceles de la posguerra a la espera de que se resolvieran otros procesos en los que estaba incurso: los números 8369, 1394, 6332 y 3009. Fruto de los mismos, el 24 de diciembre de 1941 el fiscal jurídico militar pide para el funcionario y periodista una pena de treinta años de reclusión mayor por la consabida adhesión a la rebelión.

El tribunal del Consejo de Guerra Permanente n.º 3, presidido por el coronel Francisco García Rodríguez, con los tenientes Narciso Rodríguez Luis y Joaquín

Hernández Repeto y el alférez Manuel Pérez Povedano como vocales, actuando el oficial José M.^a García Delgado como ponente, el 7 de enero de 1942 dicta sentencia contra cinco funcionarios del Tribunal de Cuentas, incluido Virgilio de la Pascua. Los hechos probados en su caso eran los mismos que en la sentencia del 22 de junio de 1939 que fuera anulada por razones desconocidas. No obstante, en esta ocasión la condena para el periodista es de solo veinte años, lo que por aquel entonces casi garantizaba una pronta y provisional puesta en libertad. Por desgracia, el incompleto y un tanto caótico sumario no incluye los documentos de la ratificación de la condena por parte del auditor y de la posterior puesta en libertad de quien, al presentarse voluntariamente el 29 de marzo de 1939, creyó conjurar los mayores peligros. Visto lo sucedido con su amigo y colega Augusto Vivero, no le faltó razón, aunque las penalidades de Virgilio de la Pascua fueron múltiples en aquel peregrinar por las cárceles de la posguerra descrito en las memorias del común amigo Diego San José.

El presente texto tan solo es un borrador del capítulo dedicado a Virgilio de la Pascua en el libro que abordará la represión de los escritores, periodistas y caricaturistas republicanos durante la posguerra. Quedo a disposición de los especialistas e interesados por estos temas para completar o corregir la sucinta información facilitada a partir de los documentos indicados.

Alicante, 26 de noviembre de 2021